

Editorial

Cuando todavía es incierta la resolución de la crisis financiera mundial, la única certeza que despunta en el horizonte es precisamente el colapso del ideario neo-liberal que orientó la nueva era del capitalismo global. Después de dos décadas de hegemonía de pensamiento único bajo el signo de la “economía de mercado” que siguió a la caída del Muro de Berlín, viejas palabras como “intervencionismo estatal”, “estatización” y “regulación” parecen retornar como espectros de un tiempo que se creía pasado, y que resurgen paradójicamente en la boca de muchos, que hasta hace poco exorcizaron esas mismas palabras. Con todo, este *revival* de discursos neo-keynesianos no debería llevar a conclusiones apresuradas que alimenten falsas expectativas de una vuelta de políticas “welfaristas”, puesto que las fuerzas desatadas por la crisis ciertamente se sustentan en la profunda reestructuración económica, política y cultural de las mismas sociedades de bienestar.

El derrumbe del ideario neo-liberal también arrastra consigo las promesas del lugar asignado a la educación por estas concepciones como medio para el logro de la tan mentada “competitividad” que suponía la introducción de “mecanismo de mercado” en los sistemas educativos para hacerlos más “eficaces” y “eficientes”. Con diferentes matices y énfasis, éstas fueron las ideas-fuerzas que orientaron las reformas educativas en nuestro país y en la región. Aunque todavía está pendiente un balance profundo de sus efectos, lo cierto es que los cambios que introdujeron las reformas, lejos de cumplir con el círculo virtuoso que proponía la ecuación de competitividad más mercado igual calidad, profundizó las tendencias a la fragmentación educativa en consonancia con la creciente desigualdad social generada por la propia reestructuración neo-liberal.

Así, en el discurso educativo también retornan viejas palabras como “educación como bien público”, “políticas de Estado” y “sistema educativo nacional”, entre muchas otras, que como en la Ley de Educación Nacional Nro. 26.206 aprobada en el 2006 sin abandonar el paradigma reformista anterior, intentan constituir una nueva retórica con tintes de neo-keynesianismo educativo. En este sentido, no es menor la presencia en el discurso político-educativo del reforzamiento del papel del Estado como agente principal en la regulación y orientación del sistema educativo pero el cambio de retórica por si solo no alcanza sino está acompañado de políticas activas que superen la dispersión de programas y acciones aisladas que caracterizaron las últimas

gestiones ministeriales. Ciertamente, la complejidad y diversidad de problemas que atraviesan la realidad educativa actual no permite afrontarlos con políticas “únicas y homogeneizantes”, tanto por su dudosa eficacia como por su contraposición con una sociedad más justa, plural y democrática.

En ese sentido, comprender la realidad educativa y pensar nuevas políticas no solo es un desafío para la gestión ministerial -que por cierto tiene la mayor responsabilidad- sino también para el campo académico e intelectual de la educación. Desde los años 90, en un marco de baja profesionalización académica en las universidades y baja profesionalización en el Estado, el pasaje de investigadores y académicos a la gestión pública poco ha contribuido a delimitar esas diferentes responsabilidades y fijar límites fuertes para alcanzar la necesaria autonomía de ambas esferas. La experiencia internacional muestra la importancia de la investigación educativa no solo como conocimiento académico sino también en sus aportes al diseño y evaluación de las políticas; pero ciertamente ello es posible cuando esas esferas reconocen lógicas y legitimidades diferentes.

Recuperando aquella tradición iniciada por Víctor Mercante, y continuada por Alfredo Calcagno y Ricardo Nassif, quienes pensaron la actividad intelectual como una forma de intervención política, *Archivos de Ciencias de la Educación* aspira a contribuir desde sus páginas al desafío de comprender la realidad educativa actual como parte del necesario aporte al debate político-educativo.

Claudio Suasnábar